



Resumen de Prensa

lunes, 14 de septiembre de 2026



Valladolid, la ciudad donde invertir, emprender y crecer, ahora.

Más información: <https://valladolidnow.com/>

2 Valladolid

Lunes, 14.09.26
EL NORTE DE CASTILLA

Informe PISA: ellas leen mejor, el impacto de la IA acaba de empezar y la familia es clave

El documento desliza que remontar requiere mejor comprensión lectora y reducir la brecha entre colegios y con los inmigrantes



ANTONIO G. ENCINAS
Valladolid

El informe PISA incluye una cantidad desbordante de datos y parámetros que, vistos con perspectiva, ofrecen una radiografía del estado presente de la educación y de dónde se pueden esconder las claves para la mejora. Algunas pistas: las chicas leen mejor y eso hace, de paso, que superen a los chicos en ciencias por primera vez, mientras les pisan los talones en matemáticas; las familias son relevantes para el éxito educativo y Castilla y León es una de las comunidades con más implicación familiar, y la IA se está adoptando a una velocidad superior al resto de la Unión Europea y de la OCDE.

Hay algunas constantes que ya se conocían y que persisten. El caso español es peculiar porque las competencias educativas son autonómicas y hay autonomías uniprovinciales, autonomías con lenguas cooficiales y autonomías como esta en la que hay colegios rurales con tres alumnos y 54 millones de gasto anual en rutas de transporte escolar. Pero incluso en ese contexto hay puntos fijos. Por ejemplo, la consistencia de Madrid, Castilla y León, Cantabria o Asturias, siempre en los primeros puestos. O la brecha de más de un curso escolar entre las comunidades con mejores resultados y las peores.

No es casual, como se puede comprobar cuando se analizan los datos del informe más allá de los promedios por materias. Esas comunidades destacadas acostumbran a mantenerse en un bloque similar en cuestiones como el apoyo familiar o un cierto equilibrio entre los resultados de la educación pública y la privada... El único punto en el que Castilla y León no guarda correspondencia con lo que se esperaría es en la correlación entre sus resultados en PISA y los que serían lógicos en función de sus variables socioeconómicas: siempre está por delante.

Es ahí donde PISA ofrece un escenario sobre el que se pueden estudiar medidas correctoras.

Y la primera de ellas tiene que ver con la lectura. En la presentación del curso escolar, hace apenas unos días, la consejera de Educación, María Pardo, hizo un repaso por los diferentes planes y programas de refuerzo. Allí aparecen planes en Primaria (de alfabetización mediática, ortografía o lectura emo-



Un grupo de alumnos entran en el colegio Juan XXIII de Valladolid el pasado miércoles, cuando comenzaron las clases en Infantil y Primaria. JOSÉ CASTILLO

LAS NOTAS DEL INFORME PISA

493

puntos han obtenido los alumnos de Castilla y León en Ciencias, solo por detrás de los de Madrid (495).

466

es su rendimiento en lectura, que les sitúa en el tercer lugar del podio tras Asturias (471) y Madrid (469).

472

es lo que logran en Matemáticas, la segunda mejor nota después de la que consiguen en Madrid (477).

cional); planes en Secundaria, desde lectoescritura creativa hasta lectura en público o el cine como recurso didáctico, e iniciativas para actualizar los planes de Secundaria y Bachillerato. «Las comunidades que obtienen un mejor rendimiento medio estimado en lectura son el

Principado de Asturias, la Comunidad de Madrid y Castilla y León, quedando las tres significativamente por encima del promedio OCDE y del total de la Unión Europea», decía el informe PISA. Pero también decía que la puntuación en comprensión lectora es mucho mayor en las chicas que en los chicos. Mucho mayor. «Las menores diferencias corresponden a Comunidad de Madrid (17 puntos), Región de Murcia (18 puntos) y Canarias (22 puntos)», dice el informe. Castilla y León está en 34 puntos, redondea PISA (son algo más de 33). «Por encima de las referencias nacional e internacionales», advierte. 485 puntos contra 452. La media de 2022 era 498. Las chicas estaban en 509, así que han perdido 24 puntos. Los chicos partían de 487, por lo que se han dejado por el camino 35 puntos.

La diferencia en comprensión lectora se ha incrementado. La ventaja de ellas era de 22 puntos y ahora es de 34. Tampoco es una sorpresa. Hace tiempo que los barómetros de hábitos de lectura dictaminan que ellas leen más. Un 72,3% frente a un 59,8% de hombres lectores de libros en su tiempo libre.

Lo que sí es una novedad es su efecto derivado. En 2022, el informe PISA situaba a los chicos de Castilla y León por delante en Ciencias y en Matemáticas. 506 puntos en Matemáticas y 510 en Ciencias. Con ellas a una distancia de 14 y 8 puntos, respectivamente. En apenas una hornada las cifras se han volcado. Ellas se han situado por encima en Ciencias, con 496 puntos. Han mejorado, por tanto. Son ellos los que han hecho bajar la media de la comunidad. Se han quedado en 490 y se han dejado 20 puntos. En Matemáticas no se ha produci-

La diferencia entre nativos e inmigrantes en Castilla y León está en la media de la Unión Europea, incluso algo por debajo

Positivo para la comunidad: se detecta un mayor índice de perseverancia de los alumnos y un mayor apoyo de las familias

do el vuelco, pero en un escenario de bajada de ambos géneros, ellas se han acercado de 14 a 8 puntos.

PISA introduce un concepto que denomina ISEC (Índice social, económico y cultural). «Permite comparar los rendimientos medios en un escenario en el que todos los estudiantes presentan condiciones socioeconómicas y culturales equivalentes». Si al descontar ese factor los territorios incrementan mucho su rendimiento, eso significa que parte importante de las diferencias observadas se debe a las características socioeconómicas de su alumnado. La buena noticia es que en Castilla y León apenas hay leve variación hacia arriba. Por ejemplo, en Ciencias son 4 puntos frente a Ceuta, que con 22 marca el techo.

Aun así, es relevante para los resultados de PISA (y para la integración y cohesión social) que los inmigrantes reciban una educación adecuada y alcancen su máximo potencial. A veces en un contexto en el que conviven diferentes nacionalidades en un mismo centro educativo. PISA mide la diferencia de rendimiento entre nativos e inmigrantes y Castilla y León, de nuevo, está en la media internacional. Algo mejor, inclu-

Lunes, 14/09/26
EL NORTE DE CASTILLA

Valladolid 3

so. Un 16% de diferencia frente al 16,3% de la UE y el 16,7% de la OCDE.

Llevados a la evaluación de PISA, eso significa que la diferencia en ciencias ha sido de 505 a 449 a favor de los alumnos nativos. En lectura, de 477 a 432. Y en matemáticas, de 484 a 426. «El impacto de la condición de migrante no es homogéneo en España y depende en gran medida de factores demográficos, socioeconómicos y de las políticas de integración educativa desarrolladas en cada territorio», advierte PISA, que deja aquí otra pista para la mejora.

Tolerar la frustración

La consejera de Educación, María Pardo, hablaba de la necesidad de involucrar a las familias en el proceso educativo. Especialmente para quebrar la inercia negativa del exceso de exposición a las pantallas fuera de las aulas. Y PISA parece darle la razón en esa idea. Mide dos cuestiones que aparecen inconexas en el informe pero que están relacionadas. Por un lado habla del «índice de perseverancia», que describe como la «capacidad de los estudiantes para mantener el esfuerzo y la implicación en el aprendizaje cuando se enfrentan a dificultades, frustración o incertidumbre». Y el resultado de Castilla y León es bastante elevado, entre los más altos de España y por encima de UE y OCDE.

Ligado a esto se analiza el apoyo familiar que perciben los estudiantes. «Es uno de los factores más relevantes del contexto educativo, ya que influye tanto en el desarrollo de las competencias académicas como en las actitudes, la motivación y las expectativas educativas del alumnado», dice el informe. Y destaca: «La evidencia internacional muestra que la implicación de las familias favorece el compromiso con el aprendizaje, el bienestar y los resultados académicos de los estudiantes».

Pues Castilla y León vuelve a estar en el grupo de cabeza.

El camino, pues, está marcado en el mismo informe en el que vienen los números que han alertado a todo el país.



Un padre antes de dejar a su hija en el CEIP Tierno Galván de Parquesol el primer día de este curso escolar. AINA BARRIO

Eso sí, también deja entrever dónde están los riesgos. El examen se hizo en primavera de 2025. Con alumnos de 16 años. Aunque la IA ya había irrumpido, no era aún una herramienta generalizada. Pues los alumnos de Castilla y León siguen la tendencia de España y se sitúan muy por encima de la media de la UE en el uso de la inteligencia artificial. Aunque algo por debajo de España (0,22), con un 0,17, las cifras demuestran que este va a ser el gran reto formativo inmediato. Con otro factor de riesgo añadido que destaca PISA: «Las diferencias asociadas al nivel socioeconómico son mucho más marcadas en todas las comunidades autónomas. Los estudiantes favorecidos presentan sistemáticamente índices superiores a los de sus compañeros desfavorecidos».

El próximo examen PISA será en 2029. Y en 2030 se sabrá si las medidas que se implanten ahora van camino de solucionar lo que parece una tendencia negativa preocupante por lo generalizada y por lo que se ha acelerado en las últimas evaluaciones.

Las otras radiografías que vienen

En 2027 habrá nueva edición de TIMMS, el estudio de competencias en Matemáticas y Ciencias en el que la región fue líder en 2023

A. G. E.
Valladolid

El sistema educativo se somete regularmente a evaluaciones como PISA. Y Castilla y León hace mucho tiempo que decidió incluirse en ese tipo de pruebas externas para medir su rendimiento. Una de las más relevantes es TIMMS, siglas del Estudio Internacional de

Tendencias en Matemáticas y Ciencias elaborado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA). En este caso es un examen centrado en matemáticas y en ciencias. Y también aquí Castilla y León defiende sus buenos resultados. Se celebra cada cuatro años desde 1995 con alumnos de 4º de Primaria y 2º de ESO en un buen número de países (70 en la última edición). Entonces fueron los mejores en Matemáticas y los segundos en Ciencias.

El próximo examen se celebrará en la primavera de 2027 y sus resultados se conocerán al año siguiente. Y aquí también hay una tendencia que observar, por si se confirma.

En 2019, los alumnos de Castilla y León obtuvieron 528 puntos en Matemáticas y 535 en Ciencias. Cuatro años después, la nota bajó levemente, hasta los 522 puntos en Matemáticas y los 528 en Ciencias. Una rebaja mínima pero que puede ser indicativa si se alinea con lo ocurrido en el último informe PISA.

También en primavera de 2027 se realizará una evaluación de diagnóstico en Castilla y León en 4º de Primaria y 2º de ESO, según se explicó en la presentación del curso escolar. Será sobre competencias clave y aún no hay fechas definidas.

Y se añade al calendario de pruebas, que empezaría este mismo mes de septiembre con una prueba nacional piloto a 4º de Secundaria, la

prueba ICILS 2028. Se trata de un estudio internacional sobre competencia digital, promovido por la International Association for the Evaluation of Educational Achievement. La prueba piloto, para estudiantes de 2º de la ESO, se celebrará entre marzo y mayo de 2027.

La consejera de Educación, María Pardo, presentó como novedad, en medio de este calendario de evaluaciones, la creación de una unidad que se dedique a analizar los resultados de estas pruebas, que tienen como factor común el hecho de que son estandarizadas y permiten comparar resultados, establecer patrones o buscar «puntos fuertes y oportunidades de mejora del sistema educativo». A partir de ahí la consejería tendrá que analizar qué medidas implanta para que el siguiente ciclo de evaluaciones educativas muestre un cambio de tendencia.

4 Valladolid

Lunes, 14.09.26
EL NORTE DE CASTILLA

El reto universitario en PISA es educar en IA y formar docentes que «rechazan» las matemáticas

El vicerrector de Calidad de la UVA pide analizar las diferencias entre autonomías, con casi tres cursos de desfase entre las mejores y las peores



SERGIO GARCÍA RUBIO
Valladolid

«Son informes de cuatrocientas páginas. Uno tendría que pedir a la propia sociedad que no cometa el mismo error sobre el que se ha puesto el foco», dice José María Marbán, vicerrector de Política Académica y Calidad Docente de la Universidad de Valladolid. Él se refiere a la comprensión lectora, uno de los puntos que más se han destacado de los resultados del último informe PISA, donde se ha producido un descenso generalizado que en Castilla y León —que todavía se mantiene en el podio nacional— ha dejado los números en mínimos históricos. Y lo dice porque detrás del dato hay un análisis, un motivo que ahora hay que buscar para saber qué ha pasado. «Hay que analizarlo con cuidado. Es un sistema muy complejo de evaluación que lleva muchos años de rodaje y que ha ido mejorando y perfeccionándose», prosigue. Uno de los primeros aspectos que menciona el vicerrector es la pandemia y sus efectos, que todavía hacen lo suyo años después. «Estos alumnos que han hecho las pruebas estaban en Primaria durante la pandemia. Por ejemplo, en el caso de las matemáticas, hace muchos años que la investigación sabe que la consolidación de la alfabetización matemática de los primeros años es determinante en lo que sucede después, en el resto de la vida académica. Y esos cursos que sufrieron el impacto del covid pueden

verlo claramente reflejado en lo que después sucede en Secundaria». Así que sí, los efectos se van a seguir arrastrando durante un tiempo.

El siguiente aspecto, quizá el que más ha acaparado el foco mediático, ha sido el de la cultura digital en clase y en el hogar. El informe refleja que los alumnos que utilizan de modo descontrolado los recursos digitales fuera del aula pueden obtener hasta 30 puntos menos que un compañero que no lo hace. Y todo esto, sin que en este PISA estén muy claros los efectos de otro factor tan relevante como es la inteligencia artificial, que seguramente será una de las claves del próximo informe. «El texto dice que no hay datos concluyentes sobre su impacto, pero se pueden observar pinceladas. Quien no la utiliza parece que obtiene mejores resultados, quien la usa en exceso tiene claramente peores resultados, pero la zona intermedia es muy difusa. No hay ningún dato concluyente», apunta el vicerrector.

Para ello, dice que la sociedad y también las propias universidades deben aprender a regularla. «Bien utilizada y con un uso crítico es tremendamente útil. El problema es que de momento nadie ha dado formación, nadie ha explicado nada, se está aprendiendo con los móviles. PISA tiene que ver mucho más con la capacidad de comprensión y la toma de decisiones que con hacer cálculos. Si utilizáramos bien la IA, haríamos el informe muy bien. No tiene que ser perjudicial, pero se debe hacer un análisis crítico de los datos que aportan estas herramientas», defiende el vicerrector.

Más se relacionan los resultados con el uso excesivo de las pantallas, que puede llevar a una pérdida de determinadas funciones ejecutivas que tienen que ver con la atención, con la memoria de trabajo o la capacidad de leer un texto con pausa, sin buscar una lectura diagonal. «Ahí sí



José María Marbán, vicerrector de Política Académica y Calidad Docente de la Universidad de Valladolid. **MAR GARCÍA**

LAS FRASES

José María Marbán
Vicerrector de Política Académica y Calidad Docente de la Universidad de Valladolid

«La mayoría del alumnado busca ser profesor de inglés, de música, de educación física. Pero no se quiere especializar en esas materias clásicas»

«Si llegas con un rechazo a una asignatura, luego puede influir mucho cuando seas docente»

parece que existe una cierta correlación entre el uso abusivo de la pantalla fuera de los fines académicos y lo que ha sucedido, especialmente con la lectura». Y si falla esto, todo va detrás. Porque en la comprensión lectora también entran las matemáticas. Un ejemplo sencillo, el texto de un problema matemático. Si no se entiende por falta de comprensión, pues ya no hay más que decir.

Otro factor importante, concreta el vicerrector, está en el profesorado, especialmente en su formación.

«En las grandes áreas de conocimiento, que son las que mide PISA, no está muy claro cómo es la formación inicial en estas disciplinas. Sería una variable interesante a analizar, tanto la inicial, que es la que ofrecemos en los grados de educación, como la permanente, que es la que lleva a cabo la consejería en relación con las universidades», destaca. Marbán también habla desde su perspectiva como docente en la UVA, donde imparte clases en el área de Didáctica de la Matemática, precisamente una de las patas que centran los resultados del informe.

Ahí entra el doble rol de sus alumnos. Los estudiantes de los grados de Educación de la UVA son ahora universitarios, pero también serán los profesores del futuro. «Desde el rectorado estamos trabajando en una normativa sobre el uso de la IA, sobre todo para tratar de acompañar en su uso crítico y razonable y de herramientas contrastadas. Aquí en educación ya se trabaja con ello y en algunas asignaturas se incorpora de manera razonable, tanto para ver sus peligros como su potencial. Para ello también se está formando al propio profesorado universitario», confirma el vicerrector.

No es no utilizar la IA, es saber cómo hacerlo. «Es una herramienta

potentísima que ha venido para quedarse, como en su momento lo fue internet, pero no está exenta de peligros si no se utiliza bien. Es un reto y eso se consigue inculcar desde abajo, desde Primaria y Secundaria. El hábito de lectura, el hábito de razonamiento crítico, el acostumbrarse a leer textos a fondo. Es acostumbrarse a manejar la misma información que vamos a ver después en el mundo real», incide. Todo esto también desemboca en las personas desinformadas, que en el informe aparecen reflejados como colectivos vulnerables. «Nos pueden contar lo que quieran, que no somos capaces de hacer una lectura crítica, vamos a ser manipulados. Es bastante interesante».

También dentro de estos universitarios hay otro aspecto relevante para los futuros docentes de la comunidad, quienes llegan al aula con un «rechazo» a las matemáticas. «La mayoría del alumnado que llega quiere cursar una mención: profesorado de inglés, de música, de educación física. Quiere ser especialista en esas materias. Si entran en centros (en el caso de Primaria) van a tener que impartir otras asignaturas, puede que matemáticas, ciencias naturales o lengua. Esa es la realidad. Pero no se quieren especializar en esas materias clásicas que luego aparecen en PISA—lengua, ciencias y matemáticas—. De los 180 alumnos que entran cada año en Primaria, puede que solo diez quieran hacerlo. Y además se llega con un rechazo a las matemáticas. Si al final tienes que impartir estas materias, eso puede influir mucho», concreta el vicerrector.

Desigualdad regional

No todo es malo y Marbán también destaca que España sale bien reflejada en el sentido de pertenencia a la escuela o los asuntos relacionados con el «bullying», la felicidad en clase. Además, pone el foco sobre las diferencias entre comunidades autónomas. «Ni siquiera se puede hablar de España como un colectivo homogéneo dentro de PISA. Si desglosas y ves cada región puedes ver que hay distancias de hasta casi noventa puntos. Son casi tres cursos académicos de diferencia. Eso es preocupante. Ahí no se puede argumentar que es por una ley educativa, no puede ser el único argumento. Creo que hace falta que por fin se haga un análisis serio a nivel nacional, qué provoca esas diferencias en un mismo país y qué se puede hacer para cambiarlo», zanja el vicerrector.



E.M.

«DIÁLOGO» CON LOS AUTÓNOMOS

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quíñones, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de ATA Castilla y León, encabezados por su presidenta, Leticia Minguenza Balseca, en la que informó sobre las ayudas del nuevo 'Kit

de autónomos' y aseguró «diálogo y colaboración». Ese 'kit' incluye el Bono Autónomos de 300 euros, la ampliación de ConsolidaCyL hasta los 24 meses, el Bono Recupera-T para compensar las pérdidas sufridas durante la baja laboral y el refuerzo de RelevaCyL para favorecer la continuidad de negocios.

lunes, 14 de septiembre de 2026



domingo, 13 de septiembre de 2026

La responsable educativa se enfrenta al reto de sostener un sistema elogiado a lo largo de los años tras el tropiezo en PISA



ANTONIO G. ENCINAS
Valladolid

La entrevista se realiza 24 horas antes de que se publiquen los resultados de PISA, que ya se rumorea que no son buenos para nadie. Al día siguiente, María Pardo (Simancas, 1971), recién estrenada consejera de Educación, hace un aparte para rematar este encuentro con unas preguntas concretas sobre los resultados. Ha asumido el cargo «con la responsabilidad», dice, de defender una materia en la que la comunidad es líder. Pero esta vez no tendrá a su cargo a las universidades, que caen en el departamento de su exjefe, Suárez-Quíñones.

—Se hace raro, en una entrevista a una consejera de Educación, que no haya una parte de universidades. No sé cómo se va a trabajar esa escisión, porque temas como la selectividad siguen estando conectados. —Pues con normalidad. Lo explicó muy bien el presidente. Que había tomado esa decisión porque consideraba que era la mejor manera de vincularla a la empleabilidad. No es una decisión extraña en la administración española. Otras comunidades autónomas también tienen esa división. Y también en la propia Administración General del Estado. Con la Consejería que ahora es competente en materia de universidades nos gustaría formar un grupo de trabajo para diseñar una estrategia de empleabilidad.

—La FP ha sostenido la matrícula, que es más o menos estable desde hace unos años. ¿Hay una burbuja de FP o es una tendencia que obliga a acelerar mucho a la administración para ponerse a la altura de la demanda?

—Uno de los éxitos de la política educativa de la Junta tiene que ver con la Formación Profesional, porque trabajamos de la mano de los empresarios y hemos sido capaces de analizar sus demandas conjuntamente con ellos. Lo más relevante es que hay alumnos que claramente la ven de otra manera, como una educación de calidad, de éxito y sobre todo con un grado de empleabilidad enorme. Hablamos ya de 51.000 alumnos. Y además, de los 10 alumnos que superan una formación profesional, 9 se quedan y trabajan en su provincia. Eso implica muchas cosas. No solamente que se da un éxito en la formación, sino que además conseguimos que no haya un éxodo de esa formación y de esa inversión que realizamos, que es precisamente lo que pretendemos también en el ámbito universitario.

—En FP se ha quedado con uno de los pesos pesados de la consejería, Agustín Sigüenza. También se mantiene Luis Domingo González. Es un organigrama muy amplio si se tiene



«Ojalá pudiéramos implantar los conciertos en Bachillerato»

María Pardo Consejera de Educación

en cuenta que no cuenta con 'universidades'. ¿Era necesario?

—Organigrama amplio... Para una consejera nunca es suficiente. Teniendo en cuenta que hablamos de una dotación tremenda, porque tenemos más de 400.000 alumnos y 37.000 docentes y a eso le sumamos todo el equipo que forma parte de la Consejería de Educación. Esta consejera ha conseguido mantener esos seis centros directivos con el visto bueno del presidente, porque ha entendido que era bueno crear una dirección nueva de bienestar educativo, que es la primera en España que reúne esas competencias. Que ya se estaban poniendo en marcha, pero que evidentemente va a tener también un trabajo nuevo que desarrollar a lo largo de estos cuatro años.

—En su comparecencia de inicio de legislatura dio una sensación, lógico puesto que debuta en el puesto, de mucho continuismo. Fortalecer, consolidar, fueron verbos que repli-

tió. ¿Dónde queda la innovación?

—Lo que funciona conviene mantenerlo. E innovar aquello que consideras que todavía puede mejorar. Tenemos un sistema educativo que es referencia en España y en el mundo. Y por eso, gran parte de lo que nos ha llevado a esos puestos tan altos no queremos modificarlo. Somos líderes en educación porque hemos apostado por reforzar la lengua, por reforzar la comprensión lectora, por reforzar matemáticas, por el refuerzo también en materias como el inglés o las competencias STEM... Y eso no lo vamos a cambiar porque es lo que nos ha llevado a ese éxito educativo. ¿Dónde queremos insistir? Pues vamos a poner en marcha un programa de transición de primaria a la ESO que queremos que llegue a 3.000 alumnos; queremos mejorar también toda la parte de la equidad, no tanto con más ayudas, sino también implantando medidas que ayuden a las familias a implicarse más y mejor en la educación.

—Es una consejería arriesgada porque, claro, el penúltimo Informe PISA era todo medallas de oro. Desde esa posición solo se puede perder, no mejorar.

—Es prácticamente imposible obtener matrícula de honor en el examen de forma continuada. Pero lo cierto es que Castilla y León en los años que ha participado en PISA siempre ha estado en el podio. No queremos modificar lo que está funcionando y lo que nos ha llevado a ese éxito. Un éxito de nuestros docentes, que son los mejor formados; también de las familias, en esa participación en la educación; y lógicamente de unos alumnos que han sabido responder al esfuerzo y a la calidad que hemos querido implantar.

—Una de las reivindicaciones históricas de esta comunidad ha sido la selectividad única. Los consejeros del PP firmaron un pacto para, más o menos, acompañar la prueba. ¿Cree que alguna vez será posible? —Claro que sí, porque estoy conven-

cida de que Feijóo va a ser presidente en un tiempo relativamente breve. Y lo que está claro es que es un hombre que cumple su palabra. En Castilla y León estamos en esa exigencia y en su cumplimiento.

—La crítica, por ahí, viene de que muchas veces esa igualdad se produce por abajo, rebajando el nivel.

—Lo que ha caracterizado al Gobierno del PP es defender el esfuerzo. Y nosotros desde luego queremos igualar por arriba, porque entendemos que algo de error ha habido en esa tendencia a no reforzar el esfuerzo. La vida, de hecho, lleva a que luego, en la universidad o en la formación profesional, no baste solamente con adquirir una serie de conocimientos y de competencias, sino que también ese esfuerzo tiene que verse reforzado. Fijese que hemos sido una comunidad autónoma que hemos reforzado la autoridad del profesor, precisamente porque no podemos dejarnos llevar por corrientes que entienden que todos somos

Domingo, 13.09.26
EL NORTE DE CASTILLA

Valladolid 5



María Pardo, consejera
de Educación
de Castilla y León.
ALBERTO MINGUEZA

educación, por los profesionales de la educación. Hay muchísimo que reflexionar. De hecho, la primera evaluación de la legislación del Partido Socialista, de la Ley Celáa, de la Ley Alegría y ahora de la Ley Tolón, pues es la evaluación de PISA.

—Había de escuchar al profesorado, que también tiene reivindicaciones históricas en Castilla y León, como rebajar la interinidad, las retribuciones respecto a otros territorios...

—Partimos ahora mismo de una situación en la que los docentes han visto cumplidas las expectativas que habíamos firmado en un acuerdo al que se llegó en 2022. Había una parte en 2025 que restaba por cumplir y que hemos cumplido antes del 1 de septiembre. Es decir, en estos momentos todas las reivindicaciones de los docentes se han cumplido por parte de la Junta de Castilla y León. La última, una reivindicación histórica que así lo han reconocido los firmantes de ese preacuerdo, porque el acuerdo se firmará en las próximas semanas, que es retribuir las tutorías y reducir la jornada lectiva a los mayores de 55 años, que se hará de forma progresiva. Mire, solo ese último acuerdo tiene una carga presupuestaria aproximadamente de unos 200 millones en los próximos 5-7 años. Lógicamente, cada vez que hablamos de mejorar las condiciones del profesorado, siendo 37.000 los docentes, la carga presupuestaria es elevadísima, y a pesar de todo lo estamos haciendo. No hay una sola reivindicación en estos momentos del profesorado que la Junta de Castilla y León no haya cumplido. Es verdad que otra de nuestras obligaciones es reducir la interinidad. El año pasado conseguimos, en el ámbito de los maestros, estar por debajo de la media nacional, un 6,94%, cuando la recomendación es un 8%. Este año hemos subido, estamos en un 9 y pico, precisamente porque este año no hemos convocado oposiciones. Las convoco caremos el año que viene. Queremos reducir esa tasa de interinidad. Es un compromiso y para eso lo llamamos con nuestro presupuesto. De todas formas, quiero darle una cosa: es fácil compararse con los que tienen otro sistema de financiación. Ahí es fácil atender todas las reivindicaciones. La diferencia de financiación no es equitativa. Por eso, no solamente en educación, sino en sanidad, en servicios sociales, estamos en el podio muy solos. Ojalá la sensibilidad del actual Gobierno de la nación se viera reflejada en una financiación, ya no digo ajustada a nuestra realidad, sino justa.

—Una de las críticas que le que les han hecho, sobre todo a raíz de la educación gratuita de 0 a 3 años y los requisitos que se impusieron para poder tener esas aulas, es que se ha beneficiado a la concertada. La portavoz de Vox en la comisión lo primero que le dijo es que tenía que defender y proteger a la concertada, de la pública se acordó poco. —Lo que hay que poner encima de la mesa es que la Constitución reconoce en el artículo 27 la libertad de elección de los padres en la decisión de en qué centro educativo quieren que sus

hijos sean educados. En esta comunidad autónoma siempre hemos defendido que eso implica que la educación concertada complementa a la educación pública. Y no vamos a dejar de cuidarla porque es un complemento a la educación pública.

—En otras comunidades PP-Vox se ha hablado ya de conciertos en bachillerato. No sé si usted aquí eso lo contempla como una posibilidad a medio plazo.

—Nos gustaría. Yo no me cierro a que eso fuera así. Si tuviéramos financiación, ojalá pudiéramos implantarlo. En estos momentos no está encima de la mesa, pero por falta de voluntad. Hace poco me he reunido con los representantes de la educación concertada y he puesto encima de la mesa que ese deseo lo compartimos y nos parece razonable, pero que existen carencias presupuestarias en estos momentos que nos impiden abordarla.

—Respecto a los currículos, hubo un par de cosas que me llamaron la atención en su comparecencia. Una es que cree que el plan de lectura sirve para mejorar la alfabetización mediática e informacional en un momento en el que la desinformación es una de las grandes amenazas para la democracia, según muchos estudiosos y académicos. ¿Comparte ese análisis? ¿Cómo implantamos esa manera de alfabetizar sobre la información?

—La comprensión lectora es algo que forma parte esencial del éxito educativo. Sin comprensión lectora,

LAS FRASES

PROTESTAS

«No hay una reivindicación en estos momentos del profesorado que la Junta no haya cumplido»

DIFERENCIAS

«Es fácil compararse con los que tienen otra financiación. Ahí es fácil atender todas las reivindicaciones»

FORMACIÓN PROFESIONAL

«De cada 10 alumnos que superan una FP, nueve se quedan y trabajan en su provincia»

CAMBIOS

«Vamos a poner en marcha un programa de transición de primaria a la ESO que queremos que llegue a 3.000 alumnos»

FUTURO

«Cuando estemos en el Gobierno de la nación esperamos que haya un cambio educativo en el que se vuelva al sentido común, al esfuerzo y al éxito»

nuestros alumnos no van a ser capaces de enfrentarse al mundo, y para esa comprensión lectora hay que enseñar también a manejar la información. En estos momentos todos estamos desbordados de información: buena información, mala información. ¿Quién sabe cuál es la información correcta? Es imposible porque es ingente. Lo que nosotros pretendemos es que los alumnos sean capaces no solamente de manejar esa información, sino de ser reflexivos antes de enfrentarse a ella. La inteligencia artificial, la información, las redes sociales, tienen que ser una herramienta, pero hay que educar para que esos alumnos que están en esa fase formativa no se desborden y, sobre todo, no se desinformen. No es fácil porque, insisto, hasta a un adulto le cuesta distinguir lo que forma parte de la realidad y lo que forma parte de la ficción, pero ahí está nuestra tarea con nuestros docentes.

—Y luego, historia del terrorismo en España. Forma parte del pacto con Vox también. En principio se hacía a través de una serie de actividades. No sé si pretenden ahondar más en eso, darle más contenido o seguir con esa fórmula.

—Esa fórmula ha sido muy exitosa por una razón, y es que los alumnos conocen a través de víctimas del terrorismo lo que ha sido esa parte tan tremenda de nuestra historia que no queremos borrar. Por tanto, es una educación en valores que forma parte del ideario de la Junta, de la Consejería y también del propio Partido Popular.

«La bajada en PISA es peor a nivel nacional que internacional, y el elemento común es la Ley Celáa»

A. G. E.

—Culpa de la bajada en PISA a la ley Celáa, pero también dijo tras conocer los resultados que 23 de los 25 mejores países también bajan. Hay muchos factores que analizar.

—Es peor la bajada a nivel nacional que a nivel internacional, y eso nos tiene que hacer reflexionar. En el caso de España, hay un elemento común y es que todas las comunidades autónomas estamos aplicando la misma ley, la LOMLOE, que claramente es la que suspende. Y eso es una reflexión que nos tiene que llevar inmediatamente a tomar medidas. La de Castilla y León es: nosotros estamos en el podio, seguimos en la excelencia educativa. Muy bien, pero lo que queremos empezar a hacer ya es poner de manifiesto al Gobierno de la nación que tiene que cambiar de rumbo, que ese modelo basado solamente en la adquisición de competencias está dando unos resultados muy negativos.

—Han comentado también el uso de las pantallas como otro factor importante. Y a eso se va a añadir,

en la edición de PISA de 2029, una IA que el año pasado aún estaba empezando. El batacazo podría ser aún mayor.

—No hablaría de la tecnología como un problema, sino como una herramienta. No podemos estar al margen de la evolución y de la tecnología. Siempre la mejor manera es educar, y es lo que nosotros planteamos. Lo que está diciendo PISA es que donde se están dando malos resultados, donde el rendimiento de los alumnos baja, es justamente fuera del horario lectivo. Es decir, aquellos alumnos que fuera de los centros educativos, en sus domicilios, en sus hogares, tienen un acceso no sé si controlado a las redes sociales, a los medios digitales, al teléfono móvil, después tienen un rendimiento académico mucho peor. Lo primero de todo es el diagnóstico, y a partir de ahí aportar herramientas.

—Es que enseñar a las familias es complejo. Igual le ha pasado a usted como a mí, decirle a sus hijos: «deja el teléfono en la mesa que estamos comiendo», y de repente te

ves a ti mismo consultando el teléfono en la mesa.

—Exacto. Bueno, es que es una reflexión de sociedad, efectivamente. Esas familias tienen que saber que esto está ocurriendo. Alertarles de algo que hasta un determinado momento les parecía que no tenía importancia. No quiere decir que las familias se desentiendan de sus hijos, ni muchísimo menos. Es muy probable que muchas de ellas no sean conscientes del daño tan tremendo que les está provocando. Nosotros lo pondremos en su conocimiento, ayudaremos a los padres a que esas decisiones puedan ser más reflexivas, pero dependerá de la voluntad de los padres.

—La comprensión lectora es la clave. Si baja la comprensión lectora no se puede mejorar el resto, y las pantallas hacen que se pierda esa capacidad de profundizar en la lectura. ¿Algún plan concreto para mejorar esta faceta?

—Hoy no quiero hablar de medidas porque sería poco razonable por mi parte y muy precipitado. Pero, desde luego, lo que más nos preocupa es que baje la comprensión lectora. Baja a nivel nacional una barbaridad. Castilla y León se mantiene, pero es que es lo más importante. Sin comprensión lectora, probablemente adquirir el resto de los conocimientos y de las habilidades es imposible. Por tanto, sí, nosotros nos vamos a plantear medidas que tienen que ver con la comprensión lectora, sin ninguna duda.

iguales y que la autoridad no tiene reflejo en las aulas. Cuando seamos un partido mayoritario de gobierno también a nivel nacional, esperemos que haya un cambio educativo en el que se vuelva al sentido común, al esfuerzo y al éxito.

—¿Otra ley educativa?

—Me lo pregunta así como '¿otra ley educativa?'. Lo que verdaderamente habrá que analizar es si la ley educativa existente ha producido los resultados esperados. Si no es así, pues por supuesto que las comunidades autónomas que padecemos esa ley, que ha sido impuesta sin contar con el visto bueno de quienes tenían que aplicarla, veremos si es el momento de plantearse y decir 'esto hay que modificarlo'. Otra cosa es cómo hacerlo, porque lo que también ha dicho el presidente Feijóo es que no lo va a hacer de espaldas a la comunidad educativa.

—Lo cierto es que ninguna ley educativa se ha hecho con un pacto de Estado realmente consolidado y que la hiciera fuerte. Anterior a esta, quiero recordar que era la ley Wert, que era suya y pecaba de lo mismo. —Quizá lo que de lo que haya que hablar es, más que de un pacto de Estado, de un pacto educativo. Una parte será la de las comunidades autónomas y la parte política, por decirlo de alguna manera, o incluso la ideológica. Pero, insisto, es que no solamente es eso. Hay que escuchar a los docentes, hay que escuchar a los representantes de las familias, y a partir de ahí habrá un pacto por la

VALLADOLID

Un discreto leonés entre los cien más ricos de España impulsa el centro de datos de Torrelobatón

Rafael González-Vallinas, propietario del Grupo Vapat, desembarca en el negocio de las infraestructuras informáticas tras poner en funcionamiento 11 parques eólicos en Castilla y León con más de 540 megavatios

SANTIAGO G. DEL CAMPO
VALLADOLID

El proyecto de instalar un gran centro de datos en la localidad vallisoletana de Torrelobatón escala posiciones después de que este periódico desvelara su existencia el pasado 8 de agosto. Por un lado, los vecinos se movilizan por las consecuencias que pudiera tener para el medio ambiente de la localidad y sus alrededores. Por otro, sale a la luz quién está detrás de esa gran inversión y la trayectoria del grupo empresarial hace pensar que no se trata de ninguna entelequia pese a los grandes números que hay puestos sobre el tapete.

Y es que la inversión propuesta alcanza nada menos que 1.600 millones de euros, en un complejo de 24 hectáreas que generará 140 empleos. La preocupación principal de algunos vecinos, en respuesta casi siempre a las alertas de organizaciones ecologistas, es la gran demanda eléctrica que requeriría en centro: nada menos que 2.000 gigavatios al año.

Se trata de la primera incursión en el negocio de los centros de datos de un magnate leonés de los más ricos del país, titular de un gran grupo empresarial que ha crecido exponencialmente en los últimos años pero que permanece en la más absoluta discreción. Brillan por su ausencia las fotos en la red de Rafael Antonio González-Vallinas (León, 1947), dueño del Grupo Vapat, promotor de la iniciativa. Tampoco se encuentran noticias de que haya intervenido en algún gran congreso o que haya realizado alguna declaración pública.

Solo por sus frutos se le conoce, como diría la célebre frase bíblica de Mateo 7,16. González-Vallinas, con su Grupo Vapat, ha puesto en funcionamiento

once parques eólicos en Castilla y León con una potencia total instalada de 540,32 MW. Pero no solamente en Castilla y León opera la compañía. Según explica la empresa, tanto en Castilla y León como en Castilla la Mancha, Andalucía y Extremadura cuenta con un total de 900 MW instalados en parques eólicos, hibridaciones solares en próxima construcción (2026-2027) con un total de 300 MW adicionales, y proyectos de renovables en desarrollo, con un horizonte temporal de 2026 a 2031, por un total de 2.500 MW.

La potencia —nunca mejor dicho—, del grupo empresarial, da idea de lo factible que es la inversión del Centro de Datos de Torrelobatón. Pero hay mucho más: el monte de San Lorenzo, en el mismo término municipal de la localidad vallisoletana, junto al que se ubicará, o ubicaría, el proyectado Centro de Datos, es precisamente el enclave donde tuvo su origen el Grupo Vapat, a principios de los años 90 del siglo pasado. Una finca propiedad de la familia, donde instaló los primeros parques eólicos de gran altura de España. Se trata, así, de un empresario leonés que eligió Valladolid como su centro de operaciones. Un modelo que conserva sus raíces en Castilla y León.

La empresa se creó a principios de los 90 dedicada al sector de las energías renovables y la cogeneración, pero su fundación es fruto de una experiencia acumulada de más de 50 años en diversos sectores industriales, agropecuarios, inmobiliarios y de las energías renovables, explica la entidad. «A principios de los años 90, Grupo Vapat tiene sus primeros contactos con proyectos renovables de cogeneración de energía eléctrica asociados a la indus-

tria del *pet-food* [alimento para animales de compañía]».

La actividad industrial diversa desarrollada por González-Vallinas durante décadas, el amplio conocimiento en materia agraria y medioambiental, permiten al grupo «realizar un óptimo análisis de los emplazamientos y la implantación de proyectos renovables extremadamente competitivos», apunta la misma fuente.

810 MILLONES

Cuando se examina el amplio despliegue de parques eólicos y el millonario proyecto de Torrelobatón, es el protagonista de la historia el que más interés suscita. Un empresario discreto que no se prodiga en apariciones públicas pero que aparece en el puesto 98 entre las fortunas más grandes de España, según el ranking elaborado por EL MUNDO. Y es que Rafael Antonio González-Vallinas posee, siempre según ese ranking, 810 millones de euros de patrimonio neto, a fecha 24 de abril de este año 2026. Ese patrimonio se ha disparado desde 2021, cuando apenas alcanzaba los 300 millones.

Pese a que el empresario, de 79 años, es originario de la Comunidad castellana y leonesa, reside en Madrid, región donde su fortuna ocupa el puesto 28 de la tabla. Precisamente el nombre de Vapat surge de la combinación de su apellido, Vallinas, con el de su mujer, María Pato. La familia tiene cinco hijos. Es titular también de otras empresas como Proyectos e Inversiones Grovade SL y Agropecuaria Monte de San Lorenzo, SL.

El grupo factura 45,6 millones de euros procedentes de la venta de energía, un ingreso que irá en aumento con la apertura de nuevos parques. A principios de este año puso en funciona-

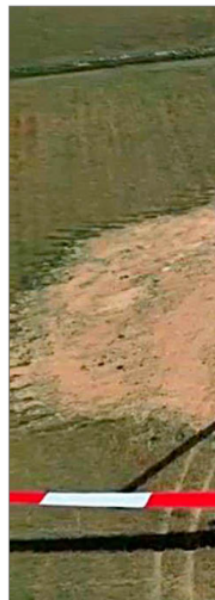
miento tres de los once que posee en Castilla y León: San Cebrián, Las Atalayas y Cerrato VI, que suman un total de 140 megavatios de potencia eólica.

También se dedica la compañía al alquiler de inmuebles, que suman al patrimonio un valor de 328 millones de euros y aportan unos ingresos al grupo de 16,2 millones al año (según las cuentas de 2024). Este negocio lo desarrolla con el nombre de Palariz SL. Precisamente en la provincia de Valladolid, en La Pedraja de Portillo, promueve el grupo una urbanización de 1.500 viviendas.

Por otro lado, la familia cuenta con explotaciones agroganaderas con 2.829 hectáreas, con 3.000 cabezas de vacuno en extensivo en las localidades vallisoletanas de Torrelobatón y Peñaflo de Hornija y en la sevillana de El Pedroso.

Característica peculiar de la empresa son las batallas legales en las que ha salido victoriosa. En 2018 la entidad denunció a cuatro bancos españoles por pactar el precio de productos financieros que les había contratado. Venció en una sentencia de diciembre de 2023. Ahora, el Grupo es un ejemplo de fortaleza financiera. De hecho, ninguna de las sociedades que lo componen tiene deuda, explican desde la compañía. Es decir, funciona completamente en autofinanciación. El 100% del accionariado lo componen Rafael González-Vallinas, su esposa y sus cinco hijos.

Por citar otras batallas legales, el grupo se querelló contra un testigo del caso de las Eólicas, que aseguró que la Junta de Castilla y León le había obligado a ceder a Vapat sus proyectos en los Montes Torozos para poder tener otros en León. Ese testigo fue condenado por la vía civil, por una vulnera-



Obras del parque eólico Pinta y Guinda Villalba de los Acores (Valladolid), en.

ción del derecho al honor, por el Juzgado de Primera Instancia 47 de Madrid en 2017, sentencia confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid.

2007, PUNTO DE PARTIDA

Grupo Vapat instaló en 2007 el primer parque eólico de la provincia de Valladolid (San Lorenzo A) en su finca ganadera Monte San Lorenzo (Torrelobatón), una hacienda de unas 1.000 hectáreas de la que es propietario desde los años 1982 y 1983. El de San Lorenzo A es el primer parque eólico de gran altura de España y uno de los primeros de Europa.

«Le dieron a Rafael, en un encuentro de empresarios del sector, que en su finca no había viento suficiente para instalar un parque eólico, por mediciones que se habían hecho, pero él estaba seguro de que viento sí había», explican desde la empresa. «Midió en altura, le dijeron que eso no sería ren-

EL COMPLEJO OCUPARÁ DOS NAVES DE 3,4 HECTÁREAS SOBRE UNA PARCELA DE 118

El centro de proceso de datos de Grupo Vapat en Torrelobatón se erige sobre una parcela de casi 118 hectáreas (más exactamente 117,83) por requerimiento urbanístico, pero solo estarán construidas unas siete cuando el proyecto esté completo en sus dos fases. Así, la fase I ocupará unas 3,4

hectáreas, «un tamaño muy similar al de una gran nave logística como la de Mercadona en Villadangos del Páramo», explican desde la empresa promotora. Una eventual fase II tendría dimensiones similares.

Para el Grupo Vapat, el enclave es el adecuado para un centro de datos, puesto

que «La Mudarra es uno de los grandes nudos eléctricos de Castilla y León, con múltiples circuitos de 220 y 400 kV, elevada redundancia y una infraestructura especialmente adecuada para grandes consumos eléctricos». A ello se suman «disponibilidad de suelo, conectividad por fibra y una posición estratégica entre Madrid, Bilbao y Zaragoza». DC Mudarra «dispone, además de

acceso eléctrico ya concedido y se ha diseñado alrededor de un modelo singular de autoconsumo renovable, asociado directamente a generación eólica y hibridaciones. El proyecto puede actuar así como tractor de un nuevo polo de centros de datos en Castilla y León, aprovechando precisamente una de las principales fortalezas de la Comunidad: su abundante generación renovable», explican desde Grupo Vapat.



Acceso al futuro Centro de Datos 'San Lorenzo' en Torrelobatón. E. M.



table, pero él subió de los cien metros. Edificó el parque más alto de España, y ahora no solo tiene once parques y es un referente en el sector, sino que muchos otros parques eólicos en España han seguido su ejemplo».

Hoy Vapat dispone de 550 MW en explotación repartidos en 14 parques.

Los últimos que han entrado en explotación, Cerrato 6, San Cebrián y Las Atalayas, situados en las provincias de Valladolid, Palencia y Burgos, suman un total de casi 150 MW.

Es solo un episodio del carácter emprendedor de este discreto leonés de 79 años, pero su vida, en 60 años de

experiencia profesional -tuvo que ponerse a trabajar muy joven-, cuenta con muchos otros igualmente sorprendentes. En su trayectoria ha creado compañías que han acabado siendo líderes, gran parte de ellas en sus sectores respectivos, a escala regional o nacional. Ha sido o es actor en

sectores como el transportista y bróker de transportes de cargas completas de gran tonelaje; comercio y almacenamiento de cereales y materias primas; colaborador del Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENP); fabricación de semillas como obtentor, productor y multiplicador, obte-

niendo tras un proceso de 10 años, la primera lenteja certificada de España (lenteja Paula); exportación de cebadas seleccionadas y preparadas para maltería de fábricas de cerveza; fabricación de piensos de alta tecnología para piscifactorías; piscifactorías de trucha (Río Oja SA); fabricación de petfood de alta tecnología, para perros y gatos, (Ipes Ibérica SA), el mayor fabricante de marcas blancas de España (70% del mercado) y el segundo de marcas propias, exportando también a varios países europeos. Su punto de partida fueron las explotaciones agrarias y ganaderas.

«Todas estas empresas interrelacionadas entre sí, fueron surgiendo de manera progresiva como fruto de la experiencia acumulada y la mayor parte de ellas ejercidas simultáneamente durante más de 30 años», detallan desde la compañía.

Entre finales de los años 90 del siglo pasado y principios de los 2000 fue transmitiendo y dejando atrás paulatinamente el resto de actividades empresariales, excepto la agricultura y ganadería «con venta de los negocios en condiciones óptimas (incluyendo *know-how* y prohibición de competencia requerida por los nuevos adquirentes)», aclaran desde la empresa. Luego inició su actividad de tenencia y explotación de bienes inmuebles relevantes y la promoción de energía eólica.

Su carácter pionero y sus contribuciones en materia agraria y en otros sectores le valió la concesión, el 15 de mayo de 2003, de la Medalla de la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Vecinos y asociaciones ecologistas recelan de un proyecto del que el alcalde «no sabe nada»

La empresa responde a las alegaciones presentadas al proyecto: «Va a consumir el mismo agua al año que una sola hectárea de regadío»

MARTA GAMAZO / S. G. DEL CAMPO VALLADOLID

Vecinos de Torrelobatón, en Valladolid, se plantan contra el nuevo Centro de Proceso de Datos (CPD) que la empresa DC Mudarra SLU, del Grupo Vapat, planea construir en la localidad. Se trata de un proyecto que el Colectivo Torozos trata de impedir mediante una recogida de firmas. «Supondría un gran impacto medioambiental», defiende su portavoz, Sofía Corral, en declaraciones a este periódico.

La portavoz explica que su principal preocupación reside en el consumo de agua: «Si se consume lo que dicen, más lo que no se dice, al final nos vamos a quedar sin agua potable». La portavoz del colectivo apunta que los puestos de trabajo que se promete crear no se materializarán. «Seguramente serán remotos, no presenciales, y por tanto no servirán para fijar población. Si no nos va a beneficiar de ninguna manera, no sirve de nada poner esa mole ahí», asegura Corral.

El colectivo, que ya ha presentado su queja en la plataforma *Change.org*

dirigida a la consejería de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Política Ambiental, así como al Ayuntamiento de Torrelobatón y a la empresa que planea sacar el proyecto adelante, denuncia «graves consecuencias para el medio, que no es donde se verán los beneficios».

El alcalde de la localidad, Alfredo Luengo, confirma a este periódico que el Consistorio todavía no ha recibido el proyecto ni noticias por parte de la empresa. «De momento no sabemos nada del tema, por eso no podemos decir nada», explica. Preguntado por su punto de vista respecto al proyecto, afirma que se mantiene a favor de los informes que den los técnicos.

Sofía Corral señala como principal preocupación de los vecinos el consumo de agua. «Es lo que más nos preocupa sin duda. Si gastan todo el agua que han anunciado, más lo que no han dicho, probablemente el agua del acuífero de la zona se vaya perdiendo hasta no tener agua potable en las casas», declara. Un proyecto que, a ojos del colectivo, afecta direc-

tamente a la zona natural en la que se ancla el municipio y donde apuntan también al impacto del ruido.

«70 decibelios en una zona de paso de fauna, en una zona natural, podría afectar mucho a la flora y a la fauna, pero también a los propios habitantes de la zona. No creo que escuchar un zumbido 24 horas sea bueno para nadie», asegura la portavoz, quien también confiesa su preocupación respecto a los posibles efectos que puede causar en cuanto al calentamiento global. «Si pasan los años y las temperaturas siguen subiendo, llegará un momento en que esta zona sea completamente inhabitable».

Además de los posibles efectos sobre los vecinos, la petición expresa su preocupación por la desaparición de la fauna del lugar. «En la zona de Wamba hay una reserva de avutardas. También es conocida por albergar especies como zorros, jabalíes y corzos. Es muy probable que se puedan ir de la zona o terminen desapareciendo».

Desde el Grupo Vapat, sin embargo, desmienten una a una todas esas

afirmaciones de los grupos ecologistas, y las consideran «errores» que se han difundido pero que no se corresponden con la realidad. Así, sobre los millones de litros de agua que se dice que el centro consumirá al día y el riesgo de secar los pozos, la empresa asegura que eso «no se corresponde» con el proyecto: «La refrigeración IT es un circuito cerrado sin consumo operativo de agua. El consumo total de todas las partidas en el escenario máximo de dos fases es aproximadamente el consumo anual de una sola hectárea de regadío en la cuenca del Duero», aseguran.

En cuanto al «error» sobre que la balsa de aguas pluviales amenaza el agua de zona, «la función de las balsas es canalizar y almacenar aguas pluviales recogidas en cubiertas y viales, no captar agua potable ni bombear el acuífero. La ingeniería ambiental prevé su reversión paulatina al terreno y su aprovechamiento para riego agrícola. El proyecto contempla además nuevo arbolado autóctono».

También desmienten desde el Grupo Vapat que exista una central térmica diésel oculta, como también se ha difundido en distintos medios: «La potencia térmica agregada de los grupos se analiza expresamente en el proyecto bajo el escenario ambiental más exigente. Son equipos de respaldo para emergencias, no una central destinada a generar electricidad de forma permanente», explican.

Sobre otra afirmación que manejan los protectionistas, sobre que el CPD dejará sin luz a los pueblos y encarecerá su factura, la empresa asegura que el centro «cuenta con acceso y conexión propios en *Mudarra 220 kV*, un nudo de transporte de alta robustez y redundancia. El autoconsumo eólico y de sus hibridaciones puede llegar a cubrir hasta el 95% de su consumo anual. No existe un recargo local específico sobre las facturas de los vecinos por la conexión del CPD».

También aseguran que la creación de empleo «no es un cuento», sino que es real: «Que las salas IT estén normalmente desocupadas no significa que el centro funcione sin personal. El proyecto estima hasta 70 trabajadores simultáneos por fase y el primer edificio puede alcanzar hasta 440 trabajadores durante la construcción. A ello se añaden oportunidades indirectas para contratas y proveedores de servicios de la comarca».

Tampoco es cierto, según el Grupo Vapat, que el CPD vaya a subir la temperatura nocturna, ni que el ruido vaya a destruir la fauna. El proyecto «prevé equipos con disipadores de calor y no se esperan alteraciones en la temperatura fuera de la instalación. En ruido, el proyecto incorpora un estudio acústico que cumple con la Ley del Ruido de Castilla y León, el RD 1367/2007 y la normativa municipal. Además el pueblo más cercano se encuentra a unos 3 kilómetros», apuntan.

VALLADOLID

La Junta llevará al presupuesto la bonificación del 60% de los peajes en cuatro autopistas

El ejecutivo subvencionará a los usuarios de las vías AP-6, AP-51, AP-61 y AP-71 que hagan entre 11 y 40 viajes al mes desde 2027 con el objetivo de promover «condiciones más igualitarias en las políticas de movilidad»

RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Desplazarse cada día para el lugar de trabajo o estudio es, para muchos ciudadanos de Castilla y León, una rutina que implica tiempo y, en algunos casos, un desembolso importante de dinero. Esto último se debe a los temidos -y en ocasiones costosos- peajes que muchas personas deben abonar para que su trayecto diario resulte más rápido, cómodo o seguro, a pesar del efecto negativo que ello tiene para su bolsillo. Es por eso que desde la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, llevará al próximo presupuesto autonómico una subvención del 60% para los usuarios recurrentes de cuatro autopistas.

Aliviar el bolsillo de los castellanos y leoneses que con regularidad utilizan las autopistas de peaje que discurren por Castilla y León es uno de los objetivos que se ha marcado el Ejecutivo autonómico. No solo eso, sino que esta se ha convertido en una «prioridad» tal y como aseguró el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en el último pleno de las Cortes. Es por ello que la Junta, a través de la Consejería de Movilidad que dirige Cristina Sanchidrián ha elaborado ya la hoja de ruta que seguirán para llevar a cabo y reduciendo los costes asumidos por los usuarios de las AP-6, AP-51, AP-61 y AP-71.

Y se hará, según han confirmado a este periódico fuentes del departamento de Sanchidrián, incluyendo las bonificaciones en los presupuestos del próximo año, los cuales tienen prácticamente garantizada su aprobación fruto del pacto de gobierno entre el PP y VOX y que otorga a ambas formaciones mayoría parlamentaria. De esta forma, la Junta «blindará» esta medida a través de un epígrafe propio en las cuentas autonómicas cuyo montante, eso sí, todavía no se ha definido puesto que todas las áreas de gobierno se encuentran actualmente volcadas en la redacción de los presupuestos a fin de que el proyec-



Peaje de la AP-71, uno de los que bonificará la Junta a partir de 2027. RAMIRO / DIARIO DE LEÓN

to pueda ser presentado antes del 15 de octubre, fecha límite que marca el Estatuto de Autonomía.

En todo caso, y aunque la bonificación de los peajes es una cuestión relativamente reciente, no lo son las constantes reclamaciones que se han producido en los últimos años para que el Gobierno de España elimine definitivamente estos pagos.

Precisamente, y ante la falta de respuesta en este sentido que la Junta reprocha al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente, es por lo que se ha puesto en marcha esta medida y que ahora, a medida que se avanza en la redacción de los presupuestos autonómicos, va tomando forma a pesar de que ya se venía anunciando, al menos, desde que comenzó la legislatura y que la consejera lo destacara en su comparecencia en las Cortes.

Sea como sea, y a pesar de que todavía no existe una cantidad de-

finida para afrontar estas subvenciones, sí están claros cuáles serán los requisitos que deben cumplir aquellos conductores que quieran beneficiarse de ellas.

El primero de ellos, según trasladan las fuentes de Movilidad consultadas por este periódico, es que deben estar empadronados en algún municipio de Castilla y León. Además, las bonificaciones serán para aquellos que utilicen de manera recurrente la AP-6 (Adanero-Madrid), la AP-51 (Villacastín-Avila), la AP-61 (San Rafael-Segovia), y la AP-71 (León-Astorga).

Como se puede observar, todas estas autopistas no son de largo recorrido, sino que principalmente sirven para conectar provincias colindantes y puntos importantes de cada territorio. Eso hace, por tanto, que buena parte de sus usuarios las utilicen en desplazamientos diarios y no de manera puntual, lo que a su vez se traduce en que el importe del peaje deba abonarse varias veces

al mes.

Y eso eso, precisamente, lo que también contempla la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial de Castilla y León, puesto que las bonificaciones del 60% irán dirigidas a aquellos conductores que utilicen las mencionadas autopistas para hacer un mínimo de once viajes al mes y un máximo de 40.

Señalan además desde la Consejería que la ayuda esta dirigida inicialmente a los usuarios recurrentes de vehículos ligeros empadronados en un municipio de Castilla y León. De hecho, las mismas fuentes destacan que al ir las ayudas destinadas a personas físicas, también podrán beneficiarse de ellas los trabajadores autónomos, a quienes este tipo de desplazamientos por las autopistas de peaje también les suponen un desembolso importante aun cuando se encuentran desarrollando su actividad profesional.

En todo caso, y aunque las ayu-

das vayan dirigidas a las personas físicas, también deberán estar «empadronados» en Castilla y León los vehículos ligeros utilizados. De esta forma, solo podrán acceder a la ayuda aquellos que paguen el impuesto de circulación sobre vehículos de tracción mecánica en un municipio de la Comunidad.

A decir de las mismas fuentes, «la medida pretende compensar parte de los costes económicos que soportan los ciudadanos de Castilla y León, que utilizan de forma habitual estas infraestructuras de peaje, promoviendo con ello condiciones más igualitarias en las políticas de movilidad».

En este mismo sentido, desde el departamento que dirige Cristina Sanchidrián aseguran que el objetivo principal de esta medida es «promover la equidad territorial en el uso recurrente de las autopistas que no tienen ninguna bonificación del Ministerio de Transportes siendo éste su titular, pese a haberlo solicitado la Junta de Castilla y León reiteradamente».

A este respecto, conviene recordar que en España existen varias autopistas que están bonificadas por el Ministerio de Transportes, lo que según el propio Gobierno de España permitió a los conductores un ahorro de 155 millones de euros en 2025.

No obstante, y tal y como recuerdan desde la Consejería de Movilidad, «en Castilla y León tan solo existen estas bonificaciones en la AP-66 (León-Campomanes)», lo que, por lo tanto, viene a justificar la necesidad de aplicar el resto de bonificaciones para buscar la «equidad». El objetivo es, precisamente, igualar los descuentos de los que se benefician los usuarios de la AP-66 para el resto de los que circulan por otras autopistas de peaje de la Comunidad.

«Con esta actuación suplimos la falta de iniciativa del Ministerio», añaden también desde la Junta de Castilla y León, que critica en este sentido que el departamento de PASA A PÁGINA SIGUIENTE

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Puente no haya actuado hasta ahora en este sentido. Es más, desde el Ejecutivo autonómico confían en que sea el Gobierno el que finalmente actúe, y por eso sitúan el horizonte temporal de estas subvenciones «hasta que lo implante el Estado o finalice el plazo de vigencia de las concesiones».

En todo caso, destacan que con esta medida se pone en marcha una «bonificación directa al ciudadano» y añaden además que las ayudas propuestas serán compatibles con los descuentos que ofrecen las concesionarias de las autopistas a los viajeros recurrentes, de manera que podrán beneficiarse por una doble vía.

La cuestión de los peajes en las autopistas y su bonificación para los conductores es, en los últimos tiempos, una cuestión de gran actualidad. De hecho, en Castilla y León este asunto ha protagonizado varios momentos del primer pleno de las Cortes de la legislatura. En la sesión de este jueves, y preguntado al respecto por la portavoz de Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, expresaba que esto es una prioridad para su gobierno.

«La supresión de todos los peajes de nuestra Comunidad es una de las prioridades que tenemos en el gobierno y una de las reclamaciones permanentes que hacemos al gobierno de nuestra nación», respondió en su intervención Mañueco, que reiteró al respecto que «la respuesta del gobierno de España ha sido absolutamente nula».

Pero no solo eso, sino que en la segunda jornada de la sesión plenaria, celebrada el viernes por la mañana, se sometió a debate una Proposición No de Ley para, precisamente, instar a la Junta a exigir al Gobierno la bonificación de los peajes de AP-6, AP-61, AP-51 y AP-71, así como la supresión del que se aplica en la AP-66, entre León y Asturias.

El Grupo Parlamentario Socialista fue el único que rechazó la iniciativa al responsabilizar a los 'populares' y consideraron que tratan de «lavar las culpas del pasado», mientras el procurador de Soria Ya, Ángel Ceña, optó por la abstención al entender que era un «bendito problema».

Además, la iniciativa recoge que si el Gobierno persiste en la «inacción», implante los instrumentos jurídicos, técnicos y presupuestarios que sean necesarios para bonificar las autopistas en condiciones similares a como se hace en la AP-66 con los usuarios recurrentes, que se benefician de una rebaja del 60%, lo cual, hasta entonces, pretende hacer la Junta a través de una partida presupuestaria concreta.

lunes, 14 de septiembre de 2026



sábado, 12 de septiembre de 2026

El precio del diésel proseguirá su escalada este invierno: «Las refinerías están al límite»

La AIE advierte de que la prolongación de la guerra agravará un mercado ya tensionado por el déficit del petróleo y la escasez de reservas

ANA CANTERO
Madrid

Cuando la guerra estalló en Oriente Medio, muchos apostaban por un conflicto de corta duración. Las consecuencias económicas de mantenerla a largo plazo –coincidió el consenso de los analistas– serían graves. Han pasado más de seis meses desde que los misiles comenzaron a sobrevolar el golfo Pérsico y la solución al conflicto parece más lejos que nunca –anoche Arabia Saudí cerraba temporalmente el oleoducto

Este-Oeste, que evita Ormuz, por ataques desde Irak, presumiblemente de milicias iraníes–. Pero los consumidores están comenzando ya a pagar la factura, que no ha tocado techo y previsiblemente seguirá encareciéndose, sobre todo el diésel, el producto refinado más tensionado.

Las refinerías se encuentran «al límite» y las presiones sobre los precios se mantendrán: la oferta y la demanda mundiales de petróleo van a descender en 2026 más de lo previsto inicialmente, según anunció este viernes la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe mensual sobre el mercado del crudo. La falta de avances para poner fin a la guerra entre EE UU e Irán dilatará la normalización de los flujos de Oriente Medio hasta 2027 y está provocando una vertiginosa subida de los precios en los surtidores.

Especialmente preocupante es la

situación del diésel, que concentra aproximadamente el 30% de la demanda global. Las exportaciones netas procedentes de países del golfo alcanzaron en agosto apenas algo más de un cuarto de los niveles previos a la guerra, al tiempo que en Europa los ataques ucranianos también han paralizado casi por completo la exportación en Rusia, el segundo mayor productor del mundo.

Caída de la demanda

«Dada la reducción de las reservas y el hecho de que el sistema mundial de refino se encuentra al límite de su capacidad, la necesidad de avanzar en la resolución del conflicto de Oriente Medio –y de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya cumple su quinto año– es mayor que nunca para evitar un mayor endurecimiento del mercado y una caída de la demanda», señala el informe. Además,

añade: «El incremento tanto de los futuros del crudo como de los precios físicos palidece en comparación con el de los productos refinados, segmento donde la escasez de oferta es actualmente más aguda».

El efecto se nota en los surtidores y, con ello, en el bolsillo de los ciudadanos. El diésel roza los dos euros por litro en España y lo supera en los países del entorno. Según la AIE, el gasóleo alcanzó en Estados Unidos a principios de septiembre precios que superaron la barrera de los 200 dólares por barril, un 94% por encima de los niveles previos a

la guerra, es decir, el doble, con Europa y Asia «no muy por detrás».

Ante esta escasez de suministro, el mundo está agotando sus reservas a un ritmo récord. Las reservas mundiales de petróleo se redujeron en 95 millones de barriles durante el mes de agosto, de tal manera que el acumulado desde febrero ya alcanza 507 millones de barriles menos. Hasta ahora eran las reservas las que habían estado jugando un papel fundamental para sostener el equilibrio del mercado, pero ahora su capacidad comienza a ponerse en duda.

El precio del barril de crudo Brent –referencia en Europa– ha rozado esta semana los 110 dólares, algo no visto desde mayo, impulsado por los ataques a petroleros en Oriente Medio, tanto en el golfo como en el estrecho de Bab el-Mandeb. Es un punto crítico en el mar Rojo, sobre el que los huties de Yemen han logrado ahora una posición estratégica con la conquista del puerto de MoCA. El volumen de petróleo en tránsito marítimo disminuyó en 65 millones de barriles en agosto.

Crisis hasta 2027

Con este telón de fondo, la AIE prevé ahora que el suministro mundial de petróleo en 2026 disminuya en 5,7 millones de barriles al día; es decir, alrededor del 6%, frente a la caída de aproximadamente el 4% prevista anteriormente.

La agencia estima que la demanda mundial de petróleo descenderá en 2,5 millones de barriles diarios este año, lo que supone 940.000 menos de barriles al día que lo estimado en agosto, en parte debido a los precios. Eso sí, se trata de una cifra bastante superior a su previsión anterior, que apuntaba a un descenso de 1,6 millones de barriles diarios.

Asimismo, la AIE ya no estima una recuperación del mercado hasta 2027. «Dada la persistencia de esta situación de bloqueo, ahora asumimos que la normalización que esperábamos que se produjera durante el segundo semestre de 2026 se pospondrá hasta 2027, manteniéndose restringido el transporte marítimo a través de Ormuz durante todo 2026».



Varios buques mercantes fondeados estos días cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam (Omán). REUTERS

Las gasolineras exigen el regreso «urgente» de los descuentos

GONZALO RUIZ

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) trasladó formalmente este viernes al Ministerio de Economía su «profunda preocupación ante la alarmante escalada» que registran las cotizaciones internacionales de los productos petrolíferos. Si bien el

precio del crudo de clase Brent (referencia en Europa) mantiene una tendencia alcista muy marcada (ayer marcaba 105 dólares por barril), las gasolineras aducen que la presión es «extraordinariamente intensa» en los mercados de refino, con precios de la gasolina fuertemente disparados y un encarecimiento sin precedentes en el gasóleo.

Las gasolineras ven «insostenible» una situación que ya tensiona «de forma extrema» los costes de aprovisionamiento de las estaciones de servicio, «impactando de manera directa en los precios de venta al público y amenazando tanto la viabilidad económica de las empresas del sector –en su mayoría pymes y autónomos–, como el poder adquisitivo de los ciudadanos y la competitividad de la economía nacional».

«De no adoptarse medidas de alivio fiscal de manera inmediata, el precio medio de venta al público experimentará a partir del próximo 1

de octubre un incremento drástico», advierte la CEEES. Ese día decaen las últimas medidas del Ejecutivo para paliar el impacto de la guerra de Irán. Según detallan desde la patronal del sector, la gasolina se encarecerá entonces una media de 6,05 céntimos por litro (resultado de aplicar los 5 céntimos anunciados más el IVA). Mucho más pronunciada sería el incremento del diésel, ya que llegaría a los 24,2 céntimos por litro, por eliminarse los 20 céntimos de la rebaja fiscal actual sumando el IVA.

Ante este escenario inflacionista, las estaciones de servicio piden al

Gobierno «la adopción urgente» de medidas extraordinarias similares a las implementadas entre el 22 de marzo y el 30 de junio. Así, reclaman el retorno de un tipo impositivo reducido del 10% en el IVA para combustibles de automoción, así como la rebaja temporal del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos (IEH).

«La situación actual de los mercados internacionales no deja margen para la demora –avisar–. Necesitamos que la Administración recupere las herramientas que ya demostraron su eficacia en primavera para proteger al consumidor».

Sábado, 12.09.26
 EL NORTE DE CASTILLA

Economía 35



Una sala con servidores de un centro de datos en Madrid. E. R.

La inversión en centros de datos se frena en seco tras el decreto del Gobierno y se dirige a otros países

La patronal se plantea exigir indemnizaciones millonarias, mientras tres grandes proyectos por 9.000 millones preparan ya alternativas fuera

JOSÉ A. GONZÁLEZ
 Madrid

Casi veinte días han pasado desde que el Consejo de Ministros diera luz verde al proyecto de decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. «Desde entonces, el teléfono (de cara a acometer nuevas instalaciones) ha dejado de sonar», explica una fuente del sector a este periódico. «Los inversores

son muy serios», remacha.

La patronal SpainDC, que agrupa a más de 300 compañías vinculadas al sector, sostiene que ese texto ha frenado en seco el interés por llegar a España y que cerca del 15 % de la inversión prevista ya trabaja con alternativas fuera del país —las vecinas Francia y Portugal aparecen como principales opciones— por si la norma sale adelante en sus términos actuales. No son proyectos oficialmente cancelados, pero sí inversiones con un plan B preparado. En concreto, se trata de tres grandes proyectos que suman alrededor de 9.000 millones de euros.

«España ha pasado de ser el país más interesante para el sector internacional a ser el menos interesante», resume Emilio Díaz, presidente de SpainDC. La asociación sostiene que el daño va más allá y habla ya

de «efectos devastadores» sobre la imagen del país y de un deterioro de la percepción de «riesgo país» por la inseguridad jurídica e incertidumbre generadas por el texto.

El problema, advierten, puede ser mucho mayor. SpainDC calcula que entre el 80 % y el 90 % de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino podría quedar comprometida si la regulación se aprueba sin cambios. Las previsiones que manejaba hasta ahora la patronal contemplaban unas inversiones acumuladas de 66.900 millones de euros y una potencia conectada a la red de unos 2.600 MW en 2030.

A ello se suma el capital ya comprometido. La asociación estima que los grupos tecnológicos han ejecutado entre 27.000 y 33.000 millones de euros en proyectos previstos para entrar en funcionamiento de aquí a

2030. «A los operadores se les han cambiado las reglas del juego de un momento para otro», lamenta Díaz.

Es precisamente la aplicación de las nuevas exigencias a proyectos ya en marcha uno de los principales focos de conflicto. Las compañías llevan años identificando terrenos, asegurando puntos de acceso, realizando ingeniería y comprometiendo capital bajo un marco regulatorio que ahora puede cambiar antes de que las instalaciones entren en funcionamiento. El documento de alegaciones del sector advierte de que las nuevas obligaciones alteran las premisas bajo las que se tomaron decisiones de inversión y comprometen el principio de seguridad jurídica.

Begoña Villacís, directora general de la patronal, anticipa incluso consecuencias económicas para el Estado. «Las inversiones internacionales se han hecho en base a un contexto legal y se han cambiado las reglas, y eso va a dar lugar a compensaciones multimillonarias», advierte. SpainDC cuestiona además el encaje jurídico del texto, denuncia una posible vulneración del principio de reserva de ley y sostiene que determinados recargos sobre peajes y cargos pueden funcionar en la práctica como un régimen sancionador.

Lío energético

En el centro de la disputa están las exigencias energéticas. El borrador obligaría a que, al menos, el 80 % de la electricidad consumida por los nuevos centros proceda de fuentes renovables, que además sea de nueva generación y que exista correlación horaria entre producción y consumo. Asimismo, las instalaciones renovables usadas para cumplir parte de esos requisitos no podrían superar los 18 meses de antigüedad.

Para la patronal, la suma de todas estas condiciones equivale a una «prohibición de facto» para instalar nuevos centros de datos en España. «Es imposible que los centros de datos puedan cumplir con estos requisitos», sostiene Villacís.

SpainDC también cuestiona las previsiones de crecimiento de demanda que de las autoridades. Así, frente a escenarios de hasta 12 GW, el sector calcula que España contará con entre 2 y 3 GW en 2030, desde los cerca de 0,5 GW actuales.

VALLADOLID

La UEMC da la bienvenida a sus más de 800 nuevos estudiantes

VALLADOLID

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) dio ayer la bienvenida a los 800 estudiantes de primer curso de sus grados presenciales con la celebración de su 'Welcome Day', una jornada concebida para facilitar su incorporación a la Universidad y mostrarles desde el primer día las posibilidades que ofrece el campus dentro y fuera de las aulas.

La jornada combinó información académica con propuestas prácticas para que los nuevos universitarios conozcan los servicios de la UEMC, descubran sus opciones de participación y empiecen a familiarizarse con la comunidad universitaria de la que ya forman parte, informa lcal.

Los grados del área de Ciencias de la Salud vuelven a ser los más demandados en la UEMC, liderados por Enfermería, Psicología, Odontología, Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD). A esto se suma la buena acogida de las nuevas titulaciones incorporadas a la oferta académica, como los grados en Derecho y Educación Primaria, junto al doble grado en CAFD y Educación Primaria, que se estrenan con una respuesta notable por parte del alumnado.